

El FMI en primerísimo lugar

Rosario Green

En vísperas de la tan anunciada reunión del G-20 que congrega a los países más desarrollados y a las mayores economías emergentes, la pregunta obligada es: ¿cuál debiera ser su mayor objetivo?

Cuando en medio de la actual crisis no podemos ver la luz al final del túnel y probablemente no la veamos en el corto-mediano plazo, no faltan quienes sugieren que, como toda crisis, constituye una oportunidad, la comunidad internacional debería aprovechar para hacer una profunda revisión de la mayoría de sus instituciones, dejando a los Estados nacionales hacer sus propias reformas internas.

Es difícil estar totalmente de acuerdo con tal propuesta, pues si bien es cierto que hacen falta soluciones colectivas que involucren principalmente a las instituciones de Bretton Woods, la verdad es que fue justamente lo interno lo que desató la crisis. La falta de reglas en el manejo financiero, particularmente en Estados Unidos, fue el detonador de una situación que pronto contaminó al mundo entero, poniendo en peligro, como lo reconociera el presidente Obama, "la supervivencia de pueblos enteros en las partes más vulnerables de la tierra".

Casi todos los países han empezado a emprender acciones buscando proteger a sus debilitadas economías, a sus consumidores y a sus bancos, y es de esperarse que el 2 de abril, en Londres, se lleve a cabo un primer esfuerzo de evaluación de esas acciones y de las perspectivas de coordinación.

Sin embargo, el G-20 está obligado a enfrentar un reto largamente pospuesto: la reforma del sistema financiero internacional que permitió que la crisis de un país se globalizara. Ciertamente, se trata del país más importante del planeta, pero aún así, el Fondo Monetario Internacional, mandatado para supervisar el sistema financiero global mediante

el seguimiento de las políticas macroeconómicas, dejó pasar de largo el calentamiento del mercado hipotecario estadounidense permitiendo con ello la diseminación de activos tóxicos y la contaminación de la economía mundial.

Ahora, el presidente Obama busca establecer la agenda de la reunión del 2 de abril a partir de una iniciativa basada, según él, en un principio muy sencillo: "Vamos a actuar sin miedo para sacar a la economía estadounidense de la crisis y reformar nuestra estructura reguladora, y esas acciones se verán reforzadas por las acciones complementarias en el extranjero". Es decir, por lo que el resto de los países hagan en lo interno.

Pero además señala que "el G-20 debe desplegar a toda velocidad los recursos necesarios para estabilizar los mercados emergentes, dar un impulso real a la capacidad del FMI para actuar con urgencia, y ayudar a los bancos de desarrollo regionales a acelerar los préstamos". Sin embargo, lo que falta es la dura crítica que merece el FMI por su parcialidad, su miopía y su incapacidad de hacer sonar la voz de alerta.

Por ello, si el G-20 no incorpora en su agenda una reforma que haga del Fondo un regulador para todos sus miembros, al tiempo que refleje las realidades del siglo XXI en su estructura y proceso de toma de decisiones, las soluciones adoptadas serán incompletas y habrá el riesgo de reincidencia.

Según cifras del Banco Mundial, entre 1998 y 2007 el crecimiento porcentual promedio de las economías de los países del G-7 fue de 2.2%, mientras que el BRIC más Sudáfrica y México, crecieron más de 5.3%. Sin embargo, la toma de decisiones en los organismos económicos multilaterales sigue concentrada en manos de un número muy reducido de países y sin reconocer que las capacidades de crecimiento se han trasladado del centro a las economías periféricas.



Continúa en siguiente hoja

Fecha 31.03.2009	Sección Primera-Opinión	Página 22
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Un ejemplo ilustrativo de los desequilibrios existente es el hecho de que Bélgica, con una población de menos de 11 millones de personas y un PIB de 449 mil millones de dólares, cuenta con más de 4,600 millones de derechos especiales de giro y el 2.09% de los votos en el FMI, mientras que México con una población de 105 millones y un PIB de 893 mil millones de dólares, disponga de 3,152 millones de derechos especiales de giro y sólo 1.43% de los votos. Otro es que Brasil y México, miembros del G-20, compartan sillas en el FMI y en el Banco Mundial con otros países, mientras que naciones de menor población, ingresos y recursos, mantienen sillas individuales. Este trato inequitativo limita indiscutiblemente la representación adecuada de los intereses mexicanos y brasileños.

Si lo que verdaderamente debe salir de la reunión de Londres, como señala el propio Obama, es “una acción audaz, amplia y coordinada que no sólo ponga en marcha la recuperación, sino que lance una nueva era de compromiso económico con el fin de evitar que vuelva a producirse una crisis como ésta”, será imperativo que se produzcan cambios trascendentes en la estructura y funcionamiento de los organismos financieros y políticos internacionales, a partir de criterios de proporcionalidad en los primeros, y de democratización en los segundos.

Sin desdeñar la urgencia de la reforma de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, hemos de reconocer que el poder se deriva principalmente de la fuerza económica. Por ello, lo primero a transformar es el FMI, equilibrando y democratizando la balanza de poder de sus miembros. Este logro haría factible su proyección en otros organismos, concretamente en el Consejo de Seguridad, dando pie a una mejor distribución del poder económico y político que evite decisiones caprichosas.

Senadora de la República